

De forma local existen capacidades para prevenir la contaminación del medio marino y se cuenta con un plan de control de derrames en el litoral caribe guatemalteco. Asimismo, existen empresas e instituciones que cuentan con material de contención y personal capacitado para atender este tipo de incidentes.

Las actividades se relacionan con convenios de los cuales Guatemala es parte, como OPRC 90, el Convenio de Cartagena sobre el Derrame de Hidrocarburos. Asimismo, cuenta con el respaldo de la Comisión Marítima Internacional y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (Concatram).

Responsabilidad ambiental

En julio, las autoridades llevarán a la práctica la operación, luego de afinar protocolos de acción, sistemas de comunicación, logística y el establecimiento de parámetros para dar pronta respuesta a un incidente.

El jefe de la Coldemar indicó que en Guatemala no ha ocurrido un desastre de este tipo, pero es necesario estar preparados por si hubiera un accidente, porque con ello peligran la fauna y flora del lugar.

Tyrone Hidalgo, viceministro de Marina, del Ministerio de la Defensa Nacional, manifestó que se espera la participación de representantes de la Comisión Nacional de Derrame de Hidrocarburos, del Pacífico y el Caribe.

Es importante efectuar una auditoría a los planes nacionales y ver la responsabilidad de cada institución. En los litorales centroamericanos se reporta que cada mes transitan no menos de mil 700 embarcaciones que llevan en su interior petróleo o derivados.

“La actividad lleva a la integración de las dependencias públicas y privadas relacionadas con el tema para trabajar. Está probado que un país armonizado puede involucrarse de mejor forma para atender una emergencia”, dijo Otto Noac Sierra, de la Concatram.

Raúl Maas, analista del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA), manifestó que los daños provocados por combustibles en los océanos repercuten en el ambiente de manera irreversible, por lo cual es fundamental que los involucrados en actividades náuticas establezcan protocolos de seguridad, para evitar daños irreparables.

“Por medio de las estadísticas se demuestran los esfuerzos que los trabajadores realizan en beneficio de la seguridad marítima internacional. Es importante mencionar que lo ejecutado no sería posible sin el apoyo de instituciones gubernamentales y de las empresas responsables con el ambiente”, manifestó Hidalgo.

Aliados estratégicos

Para atender una posible emergencia en tierra, la Policía Nacional Civil (PNC), Policía Municipal de Tránsito (PMT), la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la Cruz Roja y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, se convierten en agentes estratégicos para atender a la población y a la vida marina que pueda resultar damnificada.

Eddy Rodas, subcomisario de la PNC en Izabal, dijo que brindarán apoyo en materia de seguridad ciudadana mediante patrullajes, y trabajarán en conjunto con la PMT para regular la circulación vehicular.

“Mantenemos una estrecha relación con la Asociación de Pescadores e instituciones, para actuar en caso de un hecho que afecte a la población. Las recomendaciones van desde frenar la actividad pesquera hasta limitar los espacios de estancia humana”, aseguró Karla Morales, delegada de la Conred en ese departamento.

